



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

RESOLUCIÓN

Exp.: 062/2026

Inadmisión

Fecha entrada: 17/03/2026

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 17 de marzo de 2026 tiene entrada en el Registro general del Consejo General del Poder Judicial una reclamación efectuada en el Formulario de reclamación de derechos relativos al tratamiento de datos jurisdiccionales de D. Fidel, referida a la oficina de notificaciones del Juzgado de DIRECCION000 cuyo contenido literal es el siguiente:

«REALIZAR NOTIFICACIÓN DE UNA CITACIÓN JUDICIAL A UN DOMICILIO INCORRECTO Y A UNA PERSONA NO VINCULADA NI AL PROCEDIMIENTO NI POR PARENTESCO

HE TENIDO CONOCIMIENTO DE QUE LE HAN NOTIFICADO A UNA TERCERA PERSONA AJENA AL PROCEDIMIENTO, UNA CEDULA DE CITACIÓN A MI NOMBRE. LA OFICINA DE NOTIFICACIONES NO HA COMPROBADO LA IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RECOGIA LA NOTIFICACIÓN Y HA DIVULGADO LA CITACIÓN CAUSANDO UN PERJUICIO. QUE LA PERSONA QUE RECOGIO LA NOTIFICACIÓN NO TIENE VINCULO ALGUNO CON MI PERSONA.

ADJUNTO PARTIDA DE NACIMIENTO Y PADRÓN HISTORICO A FIN DE QUE RECABEN LA DIRECCIÓN DONDE SE REALIZO LA ENTREGA Y LA PERSONA QUE RECOGIO LA NOTIFICACIÓN. PROCEDIMIENTO DPA DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000482/2023 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº5 DE DIRECCION».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto de la reclamación

El Sr. Fidel alega en su reclamación que se ha entregado una cédula de notificación a un tercero ajeno al procedimiento por la oficina de notificaciones del Juzgado de DIRECCION000, sin comprobar la identidad de la persona que recibía la misma. La referida reclamación contiene idénticas pretensiones a la ya resuelta con el número de expediente 088/2025 y, contra



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

la que se interpuso recurso de reposición también resuelto con el núm. 012/2025

SEGUNDO.- Normativa aplicable

Los tratamientos de datos personales que se realizan en el marco de los procedimientos judiciales se rigen por la normativa de protección de datos. Así se desprende del artículo 2, apartado 4, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: *"[e]l tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de que sean competentes, así como el realizado dentro de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables"*.

Por su parte, el artículo 236 bis de la Ley Orgánica 1/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ), establece en su apartado 1 que *"[el] tratamiento de los datos personales podrá realizarse con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Tendrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional"*.

En consonancia con ese precepto, y siguiendo la LOPJ, su artículo 236 apartado 1 precisa que *"[el] tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la Ley Orgánica 3/2018 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales"*.

Y el apartado 2 del mismo precepto dispone que *"[e]n el ámbito de la jurisdicción penal, el tratamiento de los datos personales llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales y fiscalías de los procesos, diligencias o expedientes de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina judicial y fiscal, se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos personales tratados con fines de*



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente Capítulo y en las leyes procesales y, en su caso, por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Estos artículos deben ponerse en relación con el artículo 236 octies de la LOPJ que atribuye a la Dirección de Supervisión y Control del Consejo General del Poder Judicial, respecto a las operaciones de tratamiento de datos con fines jurisdiccionales que realicen los Juzgados y Tribunales y las Oficinas Judiciales, diversas funciones, entre las que se encuentran la supervisión del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales mediante el ejercicio de la labor inspectora (letra a) y la tramitación de las reclamaciones interpuestas por los interesados, informándose al reclamante sobre el curso y resultado de la reclamación en un plazo razonable, previa realización de la investigación oportuna si se considera necesario (letra e).

Estas funciones del artículo 236 octies de la LOPJ, se complementan, a su vez, con aquellas que sean aplicables de las recogidas tanto en el artículo 57 del Reglamento General de Protección de Datos, y en el artículo 48 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

En consecuencia, la competencia de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial se ejerce respecto de los tratamientos de datos personales efectuados con fines jurisdiccionales, cuya caracterización se recoge en el apartado primero del artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a cuyo tenor “[t]endrá fines jurisdiccionales el tratamiento de los datos que se encuentren incorporados a los procesos que tengan por finalidad el ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

TERCERO.- Resolución de la reclamación

Dispone el artículo 65.2 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que se procederá a la inadmisión cuando las reclamaciones presentadas «no



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Supervisión y Control de
Protección de Datos

versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción». En el presente caso, la reclamación efectuada por D. Fidel, contiene pretensiones idénticas a las del expediente 088/2025 ya resuelto por esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, habiendo sido resuelto también el recurso de reposición interpuesto por el aquí reclamante contra la referida resolución y registrado con el núm. 012/2025, por lo que, procede la inadmisión del incoado con número 062/2026.

Por lo expuesto, la Directora de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial, por el presente

ACUERDA

1.- Inadmitir la reclamación presentada por D. Fidel, registrada con el número de expediente 062/2026, conforme a lo expuesto en el fundamento tercero de esta resolución.

2.- Notificar la presente resolución a D. Fidel.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante esta Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Firmado digitalmente
Paloma Santiago y Antuña
Directora de Supervisión y Control de
Protección de Datos